

Contribución de CCBE para el Informe sobre el Estado de Derecho 2021

26/03/2021

Introducción

El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) representa a los colegios de abogados de 45 países y, a través de ellos, a más de un millón de abogados europeos. CCBE también actúa como órgano consultivo e intermediario entre sus miembros y entre éstos y las instituciones de la Unión Europea en asuntos transfronterizos de interés mutuo.

La regulación de la profesión, la defensa del Estado de Derecho, los derechos humanos y los valores democráticos son las misiones más importantes de CCBE. Entre los ámbitos que preocupan especialmente a CCBE se encuentran el acceso a la justicia, el desarrollo del Estado de Derecho, el respeto del derecho a la defensa y la eficacia de la Justicia.

CCBE siempre hace hincapié en el respeto del Estado de Derecho, los principios democráticos y los derechos fundamentales. Los valores de CCBE y de sus miembros son coherentes con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, con su preámbulo, en el que se afirma, entre otras cosas, que "*Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación*". Los valores de CCBE son también coherentes con el artículo 47 (Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial), el artículo 48 (Presunción de inocencia y derechos de defensa) y el artículo 49 (Principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas). Por lo tanto, CCBE acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de la UE y sus esfuerzos por reforzar el Estado de Derecho en la UE.

La abogacía sigue enfrentándose a los retos que surgen como consecuencia de la COVID-19 y sus consecuencias en el acceso a la justicia, la calidad de la misma, la protección de las normas democráticas y la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos en nuestras sociedades. Ahora es más importante que nunca que la Comisión Europea siga supervisando estos acontecimientos de forma permanente y tome las medidas necesarias para evitar que se socave el Estado de Derecho.

CCBE valora su inclusión como parte interesada en el proceso de consulta específica del Informe sobre el Estado de Derecho para 2021. Este hecho reconoce el importante papel que desempeñan CCBE y sus miembros en la defensa del Estado de Derecho en la Unión Europea. También reconoce la

necesidad incondicional de incluir a la abogacía en un nivel paralelo al de jueces y fiscales como actores clave dentro del sistema de justicia. En este contexto, CCBE desea que la Comisión refleje la importancia de los abogados y su inclusión en la definición del Estado de Derecho.

CCBE reconoce la importancia del fortalecimiento del Estado de Derecho para el futuro de la democracia en Europa y, por tanto, afirma su disposición a seguir cooperando con todas las instituciones clave de la UE, incluida la Comisión Europea, y a prestar su apoyo al fortalecimiento del Estado de Derecho en la UE.

Declaración de CCBE sobre el Informe sobre el Estado de Derecho 2020

En este documento, CCBE pretende destacar los avances más importantes en materia de Estado de Derecho que afectan a la profesión de la abogacía y que preocupan a sus miembros a nivel europeo.

Además, CCBE hace referencia a su [declaración sobre el Informe 2020 sobre el Estado de Derecho](#), que se publicó tras intensos debates internos e intercambios con la Comisión Europea después de la publicación del primer Informe anual sobre el Estado de Derecho en septiembre de 2020. En esta declaración, CCBE lamentó que la independencia de los abogados no se abordara de forma suficiente en el Informe 2020 sobre el Estado de Derecho y pidió un análisis más pormenorizado de la independencia de la abogacía y los colegios de abogados en el próximo Informe anual 2021 sobre el Estado de Derecho y, en particular, un reconocimiento de que la independencia de los profesionales de la abogacía y los colegios de abogados son un componente indispensable de la independencia del sistema judicial y del Estado de Derecho.

En esta contribución, y a través de cartas dirigidas a la Comisión por parte de CCBE y de las Abogacías nacionales, se ha pedido repetidamente que la Comisión desarrolle una definición clara del Estado de Derecho a nivel de la UE que incluya explícitamente a la abogacía y su papel en la administración de justicia. Sólo entonces, la independencia de los abogados y de sus Colegios de Abogados podrá ser efectivamente controlada y salvaguardada a nivel de la UE y, en consecuencia, a nivel de los Estados miembros. La independencia, sin embargo, debe ser la norma garantizada, no el objetivo final. Una profesión independiente por sí sola carecería de poder sin la capacidad de participación. Sobre la base de una nueva definición revisada del Estado de Derecho de la UE, podría establecerse una medida preventiva eficaz en este sentido. Esto se traduciría en que los abogados y las Abogacías participarían y consultarían de forma permanente tanto a nivel de la UE como a nivel nacional, en asuntos que influyen en los valores fundamentales de la profesión, pero sobre todo, que afectan a la ciudadanía que representan y a los derechos fundamentales que tratan de defender.

Independencia judicial e independencia de la abogacía y los colegios de abogados

CCBE condena cualquier intento de poner en peligro la independencia judicial. Por lo tanto, CCBE comparte plenamente las preocupaciones de la Comisión Europea destacadas en el primer Informe sobre el Estado de Derecho en relación con la necesidad de reforzar la independencia judicial, especialmente en determinados Estados miembros de la UE.

La independencia de la abogacía y de los Colegios de Abogados está incondicionalmente interconectada con la independencia de otros actores del poder judicial y forma parte de la independencia del poder judicial en general. La independencia de los abogados es importante para defender adecuadamente a los clientes, incluso en sus acciones contra el Estado, para proteger a los

abogados de ser identificados con sus clientes, para construir la confianza entre los abogados y sus clientes a través del derecho al privilegio profesional, para preservar el Estado de Derecho y para cumplir el importante e insustituible papel de prevenir el abuso de poder.

CCBE subraya la importancia de que la abogacía posea la independencia y la libertad de desempeñar sus funciones profesionales sin temor a represalias, obstáculos, intimidación o acoso, con el fin de preservar la independencia y la integridad de la administración de justicia y mantener el Estado de Derecho¹.

Especialmente en lo que respecta a la prevención de decisiones y acciones arbitrarias, no sólo depende de los legisladores de los estados el acceso a la justicia y los respectivos recursos legales para sus ciudadanos. Es necesario garantizar la existencia de una profesión jurídica independiente y autorregulada que incluya abogados/as independientes que sean supervisados de forma independiente y que puedan y se les permita impugnar las decisiones tomadas por los que están en el poder.

Alcance de la contribución de CCBE

El presente informe incluye la contribución de CCBE y de sus colegios de abogados de los Estados miembros de la UE a la consulta dirigida a las partes interesadas lanzada por la Comisión Europea en la preparación de su Informe Anual sobre el Estado de Derecho 2021. Reúne las propuestas recibidas sobre la base de las áreas acordadas colectivamente, que se analizan en particular en el apartado de Metodología de la contribución de CCBE.

Metodología de la contribución de CCBE

Este informe se ha elaborado siguiendo la siguiente metodología:

1. Datos cualitativos pertinentes procedentes de las contribuciones de las delegaciones de las abogacías a la Parte IV del Cuestionario del Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE de 2021.

El Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE es una de las fuentes de información utilizadas por la Comisión Europea para el Informe sobre el Estado de Derecho. La participación de CCBE en el desarrollo de esta importante evaluación, así como la decisión de la Comisión Europea de incluir un nuevo capítulo separado sobre la independencia de los abogados y las Abogacías en el cuestionario para el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE de 2021, es un paso positivo en la dirección correcta que reconoce el papel integral de abogados y Abogacías independientes para la independencia de la justicia en Europa y para fortalecer el Estado de Derecho en la UE.

¹ La importancia de la independencia está claramente reconocida en muchos documentos internacionales, como los [Principios Básicos sobre la Función de los Abogados](#) adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas, en 1990, y la Recomendación [Rec\(2000\)21 sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado](#), adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, así como en varios documentos normativos adoptados por el CCBE, en particular, la [Carta de Principios Fundamentales de la Abogacía Europea y el Código de Conducta de los Abogados Europeos](#) (principio a) de la Carta), así como en [el artículo modelo sobre la independencia](#).

2. Las contribuciones recibidas de las Abogacías miembro sobre los desarrollos relevantes del Estado de Derecho en los Estados miembros de la UE, con especial atención a los desarrollos que socavan la independencia de la abogacía y Colegios de Abogados, el acceso a la justicia, la calidad de la justicia, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho.

Conclusiones basadas en la información proporcionada en el anexo de esta contribución

Las Abogacías nacionales de los Estados miembros de la UE se consideran organizaciones independientes y autorreguladas que representan a sus miembros.

La pandemia de COVID-19 ha provocado riesgos sistémicos para el Estado de Derecho en Europa. En respuesta a las amenazas de la COVID-19, muchos países han tomado, comprensiblemente, medidas de emergencia y han promulgado leyes para contener el riesgo de infección masiva, para salvaguardar la capacidad médica para hacer frente a las infecciones y para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis. En su declaración sobre los riesgos sistémicos para el Estado de Derecho en tiempos de pandemia, CCBE expresó su preocupación² en relación con las medidas de emergencia, en vista de la ausencia de control parlamentario y revisión judicial. Por lo tanto, CCBE hizo un llamamiento a los Estados miembros para que no abusen de las disposiciones sobre el "estado de emergencia" ni de los "poderes especiales" concedidos al Ejecutivo. CCBE abogó por el establecimiento de cláusulas de caducidad adecuadas para este tipo de medidas y legislación, tal y como se prevé en las leyes constitucionales y fundamentales de la mayoría de los países europeos.

En las contribuciones recibidas de las Abogacías nacionales de varios países (por ejemplo, Bélgica, República Checa, Alemania, Grecia, Polonia, Italia y Eslovaquia) se proporcionó información sobre un abuso de poder arbitrario por parte del ejecutivo al promulgar la legislación de emergencia COVID-19, incluso con fines de vía rápida y evitando así el control parlamentario y la transparencia, así como ejemplos de falta de seguridad jurídica, dificultad para acceder a los tribunales y acceso a la justicia durante la pandemia de COVID-19.

Las Abogacías nacionales han informado de casos y ejemplos en los que las interferencias con la independencia de la abogacía, las violaciones de la confidencialidad de la relación cliente-abogado protegida por el secreto profesional, la identificación de los abogados con sus clientes, los obstáculos al acceso a la justicia y los ataques y amenazas directas a abogados han tenido como resultado el debilitamiento del Estado de Derecho, la interferencia con los principios básicos³ sobre la independencia de la abogacía, las violaciones de los derechos fundamentales y los principios democráticos.

El Consejo Nacional de la Abogacía de Italia denunció ejemplos de injerencias recientes en su autonomía patrimonial y financiera por parte de las autoridades estatales.

Se ha informado de varios casos preocupantes en relación con la intervención ilegal de los teléfonos de abogados en Francia, Italia y Lituania. También se ha informado de varios casos relacionados con el registro de despachos (en Estonia, Polonia, Alemania y Rumanía). La Abogacía de Lituania ha denunciado un caso de vigilancia ilegal encubierta de las actividades de un abogado.

² [Declaración de CCBE sobre los riesgos sistémicos para el Estado de Derecho en tiempos de pandemia.](#)

³ [Principios Básicos sobre la Función de los Abogados](#) adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas, en 1990, y la Recomendación [Rec\(2000\)21 sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado](#), adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Las Abogacías de Bélgica, Alemania, Hungría, Italia, Eslovaquia y Rumanía han informado de que se ha relacionado a la abogacía con sus clientes, lo que ha dado lugar a ataques injustos contra abogados en el ejercicio de sus funciones profesionales. En el anexo de esta contribución se ofrecen ejemplos concretos de detenciones de abogados/as (en Polonia, Bélgica y Rumanía).

Lamentablemente, también se recibió información sobre casos y ejemplos de amenazas a la seguridad física de profesionales de la abogacía derivadas de sus actividades profesionales (por ejemplo, en Alemania y Eslovenia). En Países Bajos, la Abogacía ha informado de un número creciente de casos de este tipo.

CCBE también fue informado de una reciente decisión del Tribunal de Casación en Francia que reduce el alcance del secreto profesional de la abogacía a los intercambios relacionados con el ejercicio de los derechos de la defensa, únicamente en los casos de lucha contra el fraude. La Abogacía austriaca informó de un caso políticamente sensible en el que el sospechoso ha sido interrogado en múltiples ocasiones sin asistencia letrada.

Varias Abogacías informaron a CCBE acerca de los desafíos relacionados con el secreto profesional que van en detrimento de la profesión y de la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía (por ejemplo, Bélgica, República Checa, Francia, Lituania y Rumanía).

Esto es especialmente importante cuando se trata de la transposición y aplicación de la legislación de la UE a nivel nacional. Varias Abogacías nacionales (por ejemplo, de Austria, Lituania, Dinamarca, Alemania, Suecia y Francia) informaron de los preocupantes intentos de comprometer e interferir con el secreto profesional de la abogacía y el principios de independencia mediante la denominada sobrerregulación (*goldplating*) en la transposición de la Directiva de la UE sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información ([Directiva DAC6](#)).

Varias abogacías nacionales que respondieron (por ejemplo, de Malta, Alemania, Dinamarca, República Checa y Suecia) se refirieron a la interferencia con el derecho al secreto profesional de la abogacía derivada de las normas y requisitos contra el blanqueo de capitales.

En varias aportaciones de abogacías nacionales se mencionaron las normas de protección de datos en el contexto de la dificultad de la abogacía para acceder a la información y las negativas recibidas en relación con la información solicitada por un abogado (por ejemplo, en Lituania) o la falta de autogestión de la supervisión de la protección de datos para la profesión jurídica y los poderes desproporcionados de las autoridades de supervisión de la protección de datos en Alemania.

La Abogacía húngara informó de sus protestas contra los comunicados de prensa engañosos contra profesionales de la abogacía y contra una modificación de una ley existente relativa a la indemnización pagadera a las personas detenidas, que podría tener consecuencias perjudiciales tanto para el acceso a la abogacía como para la profesión.

CCBE y sus Abogacías miembro observan que los debates públicos y políticos en relación con las cuestiones judiciales se han vuelto más acalorados y polémicos en detrimento de los hechos objetivos que requieren atención. Esto pone en riesgo la confianza de la ciudadanía y tiene el potencial de poner en peligro el Estado de Derecho. A CCBE le preocupa que este discurso público más agresivo pueda perjudicar gradualmente la seguridad física de los agentes de la justicia, incluida la de profesionales de la abogacía.

Los casos particulares, los ejemplos concretos y las tendencias señaladas anteriormente figuran en los

informes nacionales de los Colegios de Abogados en el anexo de esta contribución.

La aportación de CCBE en esta contribución se centra principalmente en cuestiones relacionadas con el principio de independencia de la abogacía y los colegios de abogados. Sin embargo, varios Colegios de Abogados también han proporcionado información y ejemplos que hacen referencia a elementos más amplios del Estado de Derecho. A este respecto, CCBE se reserva el derecho de ampliar el alcance de su contribución en el futuro.

El Anexo donde se detalla el análisis del Estado de Derecho país por país puede encontrarse en el texto de la Contribución de CCBE en su versión original en inglés, disponible en el siguiente [enlace](#).